

# Coyuntura

*Revista Mensual*

Nº 6 - San Salvador, junio-julio de 2006 - Año 10



**Fundación Salvadoreña para la  
Promoción Social y el Desarrollo  
Económico**

*Movilización Social para el Desarrollo Humano!*

17 Avenida Norte y 27 Calle Poniente # 1434,  
Colonia Layco, San Salvador

Apartado Postal 1952, Centro de Gobierno,  
San Salvador, El Salvador, C. A.

Teléfonos: (503) 2225-2722,  
2225-0414, 2225-0416, 2225-1212

Fax: (503) 2225-5261

Correo electrónico: [funsal@telesal.net](mailto:funsal@telesal.net)

Página Web: [www.funsalprodece.org.sv](http://www.funsalprodece.org.sv)

## PROBLEMAS PRINCIPALES DEL PAÍS QUE GOLPEAN MÁS A LA GENTE

A un poco más de dos años de cumplimiento del mandato presidencial en el país, han aumentado las manifestaciones de la gente de denuncia, protesta y demandas, entre otras, a causa del empeoramiento de la situación económica y social. Al utilizar datos de encuestas de finales de 2005<sup>1</sup>, el 72.3% de la gente coincide en que “aumentó mucho” el costo de vida; el 53.5% en que la “situación económica empeoró” y el 57.2% en que aumentó la criminalidad.

Los resultados de encuestas del IUDOP arriba mencionados, aunque generales, expresan el pensamiento de la gente sobre la situación. Pese a que se trata de opiniones que la población encuestada ha tenido acerca de la política del gobierno, refrendadas en encuesta de mayo de 2006, también reflejan o presentan una imagen del estado de la situación general del país y su tendencia al deterioro.

Desde comienzos de año, el gobierno y Fondo Monetario Internacional han procurado presentar una imagen de crecimiento de la economía por encima a la de más de diez años de desaceleración con el objetivo de vaciar la conciencia de las personas de aquellas percepciones bien consolidadas, expresadas en las encuestas, acerca de años de efectos negativos de política neoliberal que la población ya no aguanta más, pero que la mayoría no logra realizar la conexión entre el agravamiento o empeoramiento de las condiciones de vida y los responsables o causantes de la misma. Esta conexión, que ha avanzado en la conciencia de las personas, es todavía una cuestión pendiente del dominio popular. Esto es así aunque la inmensa mayoría, el 74.9% de los encuestados en mayo

---

<sup>1</sup> Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP; Boletín de Prensa Año XX, No. 3; realizado entre el 1 y 20 de noviembre de 2005.

de 2006, haya contestado que “El Salvador necesita un cambio”<sup>2</sup>.

Por otra parte, las estadísticas que sólo el gobierno elabora, dicen que entre 2004 y 2005 la economía creció de 15,821.6 millones de dólares a 16,974.0 millones; es decir, un aumento de 1,152.4 millones de dólares<sup>3</sup>, nadie sabe con certeza quienes se benefician de ese crecimiento, cuando la gente afirma que la “situación económica del país ha empeorado” entre los mismos años y que, además, reclama a su manera que se produzca cambio de modelo en el país.

Ya en mayo de 2003 el análisis sobre la situación del país era tajante: “el modelo económico y social de corte neoliberal impuesto al país por tres sucesivos gobiernos del partido ARENA, se ha agotado evidentemente, después de generar un incremento palpable de la pobreza, expresada incluso en un creciente número de muertes por hambre y desnutrición, un desempleo masivo, la ruina de la actividad agropecuaria y agroindustrial, el estancamiento y la quiebra de la microempresa y de todo el tejido productivo, la recesión económica y una aguda crisis fiscal, así como el incremento de la violencia y la delincuencia, golpeando a familias enteras especialmente a mujeres, niños y niñas”<sup>4</sup>.

¿Puede alguien atreverse a afirmar con razón, en junio o julio de 2006, que se ha producido

<sup>2</sup> Según datos de encuesta de La Prensa Gráfica, LPG, que actúa como vocero de prensa del gobierno, afirmó en enero de 2006 “que los ciudadanos, además de creer que el país está mal, tienen la sensación de que va por mal camino. El 53.8 por ciento de los entrevistados opina que El Salvador va por el rumbo incorrecto (sic). El déficit de optimismo sobre el rumbo del país se manifestó por primera vez en agosto de 2005 y se ha visto reflejado en todas las investigaciones que ha desarrollado LPG Datos. Lo anterior no siempre ha sido así: en mayo de 2005, el 53 por ciento de los ciudadanos sostenía que el país iba por una buena senda, pero tres meses más tarde esa percepción se derrumbó”.

<sup>3</sup> Ese crecimiento equivale a 7.3% a precios corrientes y 2.8% a precios reales, en base a los precios de 1990.

<sup>4</sup> Schafik Hándal, Discurso a nombre de la Fracción Legislativa del FMLN en la instalación de la Asamblea Legislativa del período 2003-2006, tras las elecciones de marzo de 2003; mayo 12, 2003.

una mejoría para la gente en el país y, lo más profundo, el gobierno, los empresarios que controlan la economía del país y los organismos internacionales que lo respaldan desde 1989, así como el gobierno estadounidense, han podido poner en marcha un nuevo modelo en particular económico capaz de sustituir al agotado y en realidad fracasado?

En realidad eso no ha sido posible ni se ven perspectivas con esa posibilidad histórica, inmediata ni mediata. Nos hemos visto en la necesidad de reiterar que las dos políticas macroeconómicas, como los rieles sobre los cuales tenía que funcionar el modelo desde 2001, han fracasado:

- A) La política de apertura comercial ha conducido a déficit comerciales en ascenso año con año, sin freno, irreversibles y crónicos, sin solución porque el aparato productivo no pudo desarrollar capacidad de para producir dólares suficientes para empujar el desarrollo de la economía del país. Ya sabemos que en 1990, cuando arrancó el modelo que hemos denominado como neoliberal por su base doctrinaria, era de apenas 680 millones de dólares y en 2005 se elevó a 3,238 millones; (en 2000, las exportaciones, sin maquilas, representaron el 76.1% de las remesas en dólares enviadas desde el exterior por salvadoreños y en 2005 el 58.6%);
- B) La política fiscal principalmente presupuestaria funciona, como flotando como ya se ha dicho, con endeudamiento en particular mediante la colocación de Bonos, fuera del país. Los 664 millones de dólares obtenidos en 2006 con la emisión de bonos, por ejemplo, sirven para financiar el déficit presupuestario, pero también para respaldar la dolarización que también está siendo estremecida tanto por la crisis fiscal como por la crisis macrofinanciera del país.

Esos 664 millones de dólares presupuestados para utilizarse en los doce meses del año, fueron utilizados de otra manera. En abril se

utilizaron 439 millones y en julio, 225 millones, incluyendo el pago de 150 millones de dólares en bonos emitidos en 2000.

Comparativo de opiniones sobre el gobierno de Antonio Saca (en porcentajes)

Opiniones	100 días Agosto 2004	1er año Mayo 2005	2do año Mayo 2006
Saca gobierna bien al país	58.2	48.9	33.7
Saca es manipulado por otros sectores	41.8	49.4	54.7
Saca cumple con sus promesas	54.7	25.4	12.7
Gobierno vela por los salvadoreños	—	41.6	27.0
Gobierno escucha demandas mucho demandas población	35.0	22.1	12.8
Situación económica del país ha empeorado	27.8	55.1	58.4
Delincuencia ha aumentado	—	34.8	55.0
El país está mejorando	46.1	29.7	27.6

*Fuente:* Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP; Boletín de Prensa Año XXI, No. 2; muestra del 7 al 14 de mayo y publicado el 29 de mayo, 2006; pág. 6

¿Cómo o con qué recursos el gobierno atenderá sus compromisos presupuestados para el resto del año, de julio a diciembre de 2006? El gobierno carece de recursos incluso para financiar sus programas sociales como el

de Red Solidaria, según el cual se regalan unos 15 dólares a cada familia en extrema pobreza ubicadas en los municipios más pobres del país.

Gobierno central: ingresos corrientes, impuestos más otros ingresos, consumidos por varios rubros, 2006 (en porcentajes)

RUBROS	PORCENTAJES
1) Ingresos Corrientes	100.00
2) Menos:	100.00
A) Pago servicio deuda pública del gobierno	33.00
B) Pago deuda previsional	17.00
C) Asignado a Corte Suprema de Justicia por ley	6.00
D) Transferencia a alcaldías por ley	7.00
E) Devolución de IVA y subsidio a exportadores, por ley	2.30
F) Pago de Remuneraciones del gobierno, excluyendo hospitales	34.70

*Fuente:* Ley de Presupuesto General del Estado 2006.

Los pagos de la deuda pública y la deuda previsional del gobierno absorben el 33% y 17% de sus ingresos corrientes, respectivamente; es decir, el 50% de esos

ingresos (por impuesto, tasas, tarifas y cobro de servicios). Más el pago de otros compromisos absorben el restante 50%, como puede verse en el cuadro anterior, dejando sin

recursos para el resto de gastos de ministerios y hospitales.

El lema de la propaganda del gobierno continúa siendo que “lo social no es complemento de nada, sino la base de todo”, pero ocurre que el gobierno no dispone de los recursos financieros suficientes para proporcionarle fundamento al lema.

Ante una situación como la descrita al gobierno y sus padrinos no les queda más camino que el endeudamiento para financiar el resto de gastos, principalmente de inversión en infraestructura y, al mismo tiempo, reducir los gastos corrientes no conflictivos, como la eliminación de varios subsidios y en teoría aplicar una política de “austeridad” para ahorrar recursos financieros.

La crisis de la situación se pone de manifiesto en el hecho de que a julio el gobierno ha tenido que colocar 179 millones de dólares en Letras del Tesoro, LETES, para atender problemas temporales de falta de liquidez o dinero efectivo para el pago a acreedores, cuyo vencimiento no puede exceder el plazo de 360 días. En 2005 el gobierno colocó, en todo el año, 180 millones de dólares en LETES, con vencimiento de pago en 2006.

La profundidad de la crisis fiscal que la gente no logra percibir, le aparece ante sus ojos cuando el gobierno toma medidas específicas en el terreno práctico que afectan directamente los ingresos de la población. Por razones políticas, y también fiscales, en enero del 2006 que tenía que aprobar aumento de la tarifa por el consumo de energía eléctrica, conforme lo establece la ley general de Electricidad y Telefonía, difirió el aumento porque había comenzado la campaña de las elecciones legislativas y municipales de marzo y asumir el costo subsidiando a las distribuidoras de energía eléctrica.

Pero a junio esa situación era insostenible y no le quedó más remedio que aprobar el aumento tarifario de dos semestres, corriendo

el riesgo de protestas populares contra tal decisión<sup>5</sup>. El gobierno tomó la decisión de manipular el aumento de la tarifa, en 14% al consumo residencial para esconder que el aumento a la tarifa era por encima del 25%, con la conciencia clara de que cualquier protesta social tiene por sí más importancia que la lucha parlamentaria, con las excepciones del caso, motivo por el cual ha tratado de encerrar toda la lucha política, y social, en la Asamblea Legislativa pero bajo medidas de seguridad y con cerrojos a la participación ciudadana o social.

Las protestas contra el incremento a la tarifa por el consumo de energía eléctrica fue una bandera del movimiento de trabajadores de la marcha del uno de mayo y varias manifestaciones de protesta de mayo y junio, y tema ausente deliberadamente en el discurso del segundo año de gobierno del presidente Saca, y evadido a propósito por los funcionarios relacionados con el tema que tenían que presentarse ala Asamblea Legislativa a debatir sobre la decisión del aumento que se sabía sería anunciada el 10 de junio.

Desde febrero de 1998 en que fue privatizada la distribución de la energía eléctrica, y luego cada seis meses, como ya se dijo, la tarifa a los usuarios aumentó sustancialmente, con lo cual las empresas distribuidoras de la electricidad recuperaron en pocos años sus inversiones iniciales, obteniendo ganancias extraordinarias, obtenidas a costa del pueblo más pobre. Es decir, el aumento estatal de la tarifa responde directamente a dos empresas extranjeras, AES y Del Sur, que monopolizan cada cual la distribución territorial de la energía que se han repartido, haciendo a un lado el mercado y violando el Art. 101 de la Constitución de la República que prohíbe

---

<sup>5</sup> Para quienes piensan que el neoliberalismo consiste en el retiro del Estado de las actividades económicas, o expresado de otra manera, conforme a la doctrina neoliberal “deben eliminarse todas las regulaciones” estatales. El aumento de tarifas al consumo de energía eléctrica está establecido en una ley y lo implementa el Estado, y no el mercado, y no “cada individuo libremente en el mercado”, el consumidor que por lo mismo es el “soberano”

este tipo de actividades económicas monopólicas, o de “mercados cautivos” como también se conoce.

Además, en el pago de la tarifa, las empresas distribuidoras le cobran arbitrariamente a la gente lo siguiente: dos veces por el uso de la red, el costo fijo y el variable (ver cuadro abajo), que aumenta por el consumo de energía al mes y que cada familia pagó al adquirir las viviendas; cobro por la cantidad de KW consumida; cobro por “atención al cliente” (entrega de la factura y cobro de la misma).

La privatización de la energía condujo al uso mayormente de petróleo, el 52%, para su producción, disminuyendo al 26% la energía hidroeléctrica y 22% la geotérmica. La energía térmica a base del uso de petróleo<sup>6</sup> cada vez más caro, ha vuelto más cara el consumo de energía porque además la generación de la misma es ahora predominantemente privada, 66%, que estatal, 34%<sup>7</sup>. Situación que la SIGET ni regula ni controla, dejando en manos de las empresas generadoras y distribuidoras la manipulación de las tarifas para su beneficio y en perjuicio del país en general y de centenares de miles de familias usuarias del servicio que no representan ni ejercen para nada la “soberanía del consumidor” como lo señala la misma doctrina neoliberal.

El gobierno trata de presentar la esperanza de que el problema será resuelto en el largo plazo con la construcción de las represas y así atenuar el más alto costo que significa el mayor peso de la generación de energía térmica, que como se sabe seguirá siendo la más cara.

<sup>6</sup> Por el aumento en el precio del petróleo aumentó en 35% el pago por la importación de hidrocarburos entre 2004 y 2005, y el pago de lo importado, 902.8 millones de dólares representó el 27.9% del déficit comercial del 2005.

<sup>7</sup> Ver Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, “Causas de los altos costos precios de la energía que pagan los usuarios en El Salvador”; 26 de mayo del 2006.

Los proyectos de generación hidroeléctrica, Tercera Unidad Central Cerrón Grande, Central Cimarrón, Central Chaparral (Río Corola), Central El Tigre (Chalatenango), han desencadenado protestas sociales por perjuicios sociales y a los recursos naturales que acarrearían a la parte norte del país y que se unen a daños en el mismo sentido ya generados por la explotación minera<sup>8</sup> autorizada a empresas extranjeras y la probable construcción de la denominada carretera longitudinal, financiada con recursos donados por el gobierno estadounidense bajo la “cuenta del milenio”.

Contra estos proyectos, el de la explotación de las minas concesionadas en ejecución, se realizó una caminata de protesta los días sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de julio, que salió de Chalatenango hacia San Salvador al ministerio de economía a presentar la demanda de detener la implementación de los mismos. Esa caminata realizada por miles de personas fue del primer tipo que se realizaba en el país, que se detuvo en varios municipios (Guazapa, Apopa) antes de arribar a la capital y recibir a su paso el respaldo popular.

### AUMENTO A LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

La crisis de las finanzas públicas y de la economía del país, forzó al gobierno a aceptar la “recomendación” principalmente del banco Mundial y Fondo Monetario Internacional de eliminar el subsidio a los buseros y aceptar el aumento a la tarifa, con los riesgos políticos inherentes a esa doble decisión, principalmente por tener que enfrentar protestas sociales variadas.

El Aumento a la tarifa del transporte público de pasajeros en junio, como respuesta a la eliminación del subsidio fue un vaivén de la

<sup>8</sup> Las minas concesionadas a empresas extranjeras para su explotación no dejan al país recursos más que migajas, en momentos en que las perspectivas de los sistemas monetarios basados en papel moneda tienden a desvalorizarse y el oro a subir de precio, lo cual sugiere que los países conserven tanto cuanto puedan de oro en calidad de reservas financieras o de respaldo financiero.

política social del gobierno, pues hasta mayo había sostenido, de manera tajante, que no “permitiría tal aumento”.

¿Ayudaba esa decisión a atenuar significativamente la crisis de las finanzas gubernamentales? En realidad no porque el

subsidio a los buseros apenas implicaba un gasto gubernamental de unos 25 millones de dólares. Lo importante de tal decisión descansaba en el hecho de aunque un monto reducido pero el gobierno no disponía de recursos propios para cubrir ese compromiso (ver cuadro más arriba al respecto).

Evolución pago servicio de energía eléctrica residencial, 2000-2005 (abril cada año)

AÑOS	Cargo uso de red			Cargo atención al cliente	Cargo por consumo energía	COSTO TOTAL	Consumo KWH	Costo promedio KWH	
	Variable	Fijo	Subtotal					Por costo total	Por consumo energía
2000			6.30	1.78	17.59	25.67	199	0.12899	0.08839
2001			6.37	1.85	18.17	26.39	197	0.13396	0.09223
2002	6.11	1.06	7.17	1.91	19.48	28.56	226	0.12637	0.08619
2003	6.76	1.08	7.84	1.75	25.18	34.77	245	0.14192	0.10277
2004	8.10	1.24	9.34	0.77	21.80	31.91	257	0.12416	0.08482
2005	8.94	1.28	10.22	0.79	24.74	35.75	275	0.13000	0.08996
2006									
Junio	8.68	1.28	10.33	0.79	27.55	38.67	274	0.14113	0.10055
Julio	8.64	1.30	10.11	0.79	30.51	41.41	268	0.15451	0.11384

Fuente: AES/CAESS, “facturas” consumo familiar correspondiente.

La decisión de eliminar el subsidio se enfrentaría a tres tipos de riesgos: uno, el enfrentamiento de estire y encoje por la nueva tarifa con los empresarios de buses; otra, con las protestas populares y sociales por el aumento de la tarifa y la tercera, romper o mantener la alianza de los buseros con partidos políticos de oposición, principalmente con el FMLN.

Por un lado, sin subsidio los empresarios terminaron imponiendo, al finalizar el mes de junio, la nueva tarifa de 0.30 dólares para los buses urbanos, según confirmaron fuentes del sector y de Obras Públicas. Al eliminarse el subsidio, los buseros sólo podían compensarlo aumentando la tarifa como efectivamente ocurrió.

De otro lado, la decisión gubernamental logró, en buena medida, romper el entendimiento alcanzado hace más de un año entre buseros y FMLN, en particular, ya que la posición de éste fue la de oponerse a la eliminación del subsidio y al aumento de la tarifa a la gente.

El gobierno se preparó para enfrentar las protestas sociales y populares en contra del aumento tarifario.

Aquí cerca, en Guatemala, aumentos a las tarifas del transporte público habían sido motivo de espontáneas protestas populares y, más lejos y en África, en febrero de 1974, aumentos en los precios de gasolina habían

sido chispa de una revolución igualmente espontánea<sup>9</sup>.

El aumento de la tarifa motivó la organización de una manifestación de protesta con estudiantes de instituciones de bachillerato y secundaria, que marcharon desde el INFRAMEN, custodiados por los policías de la UMO (o antimotines) hasta el Teatro de Cámara) y realizaron una entrevista a la entrada de la Universidad Nacional, donde los esperaban con un operativo policial y militar, en contra de “agitadores sociales” y terroristas” que respondían a instrucciones del FMLN de los “desordenes y asesinatos de dos policías de la UMO”.

En el operativo la PNC utilizó, bajo su coordinación y con ventaja absoluta, con conocimiento y premeditación, las siguientes unidades operativas desplegadas tácticamente y la logística de que dispone: unidad de seguridad pública, el grupo de reacción policial, GRP; la unidad de mantenimiento del orden, UMO; la unidad de tránsito; el grupo aéreo policial, que encargó de ataques desde el aire hiriendo a un funcionario de la Universidad nacional; la unidad especial de francotiradores y la unidad de comunicaciones.

Se trató de una operación policial por encima de los requerimientos para la seguridad pública del país, en la que intervinieron todas esas unidades operativas de la PNC y, sin embargo, no pudieron capturar al responsable del asesinato de los miembros de la UMO, pese a tenerlo ante sus ojos.

---

<sup>9</sup> “Un 13 de febrero de 1974, un donnadié empezó a gritar en contra del aumento del precio de combustible...Pronto fueron los protestantes, generándose tan fácil como inesperadamente una manifestación. Decenas, cientos, miles, marchando con una consigna: ¡Abajo el aumento de la gasolina! Al llegar a la entrada de la Universidad, la manifestación se vio engrosada por dos contingentes de signos opuestos. Primero, los estudiantes. Después, los policías colocados previamente en los alrededores, ...”; Raúl Valdés Vivó, “Etiopía la revolución desconocida”; primera edición 1977; pág. 6

Se llegó a afirmar, por eso, que los responsables de los asesinatos de los dos miembros de la UMO, fue responsabilidad de la unidad de francotiradores y no del “revoltoso”, noticia con la cual se acaparó las páginas de los medios escritos de prensa y televisión, que igual que los miembros de las unidades del operativo policial y militar también esperaban a los manifestantes en el lugar de los hechos, presentando una secuencia de actos de **violencia**, técnicamente preparados como hechos criminales para responsabilizar de autoría criminal a aquellos que previamente habían sido identificados, localizados y condenados como “agitadores sociales”, acusados de desordenes públicos, terroristas, asociaciones ilícitas y portadores de armas de fuego, todos por su militancia política o simpatía con el partido FMLN.

El presidente Saca se adelantó a los acontecimientos diciendo que de haber ganado las elecciones presidenciales el FMLN ese era el tipo de situación que hubiera vivido el país, como dirigiéndose a cierto corriente de empresario que también se inclinan por un cambio, o la frase propagandística de que el FML había “violado los Acuerdos de Paz”, cuando cada año han cerrado oídos a los reclamos y denuncias por el incumplimiento de parte del gobierno de de varios acuerdos políticos de Chapultepec y por lo cual no ha sido posible dar por cerrados los Acuerdos de Paz ni finalizada la misión de verificación de los mismos de parte de la ONU. O las afirmaciones del Ministro de Gobernación, René Figueroa, que pediría la ilegalización del FMLN y en privado rechazada semejante bobería política.

Aunque haya quienes relacionaron los acontecimientos del 5 de julio con la idea de colocar al FMLN en una posición de debilidad tal como para otorgarle al gobierno los votos para la aprobación de bonos para el financiamiento del déficit del presupuesto de 2007<sup>10</sup>, en realidad las acusaciones contra el

---

<sup>10</sup> El gobierno trató, hasta esta fecha, la “compra” de voluntades dentro del FMLN, para obtener los votos suficientes en la Asamblea Legislativa para la

FMLN como responsable de los hechos de violencia promovidos por el gobierno mismo y las fuerzas de derecha y sus medios de prensa, eran la “chonga”, digámoslo de esta manera, a una cadena de falsas acusaciones, de pura propaganda, desde el uno de junio utilizadas para esconder publicitariamente las decisiones tomadas obligadamente acerca de los problemas sociales y económicas que más afectan a la gente<sup>11</sup>.

La situación es más complicada que antes de junio. El paquete de medidas antipopulares del gobierno, como eliminación del subsidio fiscal al transporte público y aumento a la tarifa del mismo, aumento a la tarifa de consumo de energía eléctrica, eliminación de subsidio al servicio del agua potable y aumento a la tarifa, así como amenaza de aumento de impuestos como el IVA o la aplicación de nuevos impuestos para atenuar la crisis fiscal, o echar mano de los ahorros de la gente que cotiza a las AFPs para financiar el déficit presupuestario, o la implementación a futuro de proyectos energéticos o mediatos de infraestructura, o inmediatos como la explotación de minas a extranjeros, motiva a la población a pronunciarse más y más en su contra, de protesta, de rechazo, denuncia y demandas.

También el empeoramiento acumulado de la situación económica y social, como el aumento de precios generado por el “paquetazo” gubernamental, el atraso en la decisión por el aumento en el salario mínimo

---

aprobación de la ley de emisión de bonos necesarios para el financiamiento del déficit del presupuesto, tal como lo logró en enero de 2005 para los presupuestos de 2005 y 2006.

<sup>11</sup> He aquí un resumen de los ataques del gobierno y ARENA, a través de los medios de prensa, contra el FMLN, semanalmente, para mantener ocupada la cabeza de la gente de esta manera y desviarla de los problemas que la afectan: el dedo obscuro de un diputado del FMLN el día de instalación de la Asamblea Legislativa; salarios altos de asesores del FMLN; problemas de basura de la alcaldía de la capital; distanciamiento de alcaldes con la Dirección del FMLN por su exclusión de directiva de COMURES; diferencias entre dirección del FMLN y sus bases por la reforma de los Estatutos; FMLN dividido por el asunto del préstamo del BID a la Universidad nacional; hechos de violencia del 5 de julio atribuidos al FMLN; etcétera.

que tenía que acordarse en junio, como lo establece la ley, o por el aumento de la gasolina y en general por los efectos de la dolarización, pone en manos de la gente motivaciones de protesta. Las enfermedades comunes se transforman fácilmente en epidemias, y como ocurre en el país de manera recurrente, niñas y niños mueren de diarrea, de dengue y otras enfermedades porque en los hospitales públicos no disponen de medicamentos ni materiales para la atención a la población.

Las protestas sociales quieren detenerlas, de un lado, con el miedo que le quieren inyectar ala población con los asesinatos diarios especiales, en parejas, al estilo de los escuadrones de la muerte del pasado, con nuevo estilo, y la aprobación de una Ley Antiterrorista que permite calificar todo acto o actividad de protesta social como de carácter terrorista y en consecuencia delincuencia. Se trata de una situación peligrosa en ascenso, acompañada de amenazas a políticos y personas opuestas al gobierno, como una presión para que los luchadores o quienes protestan contra el gobierno lo hagan fuera de la ley, clandestinamente, porque es el terreno que más le conviene a la derecha para enfrentar a las fuerzas sociales de lucha contra el neoliberalismo.

Pero la mezquindad de un sector de la burguesía neoliberal desborda los límites. No ratifica los convenios 87 y 98 de la OIT, por no garantizar la libre sindicalización de los trabajadores, aunque ello sea al costo de perder los beneficios del Sistema General Arancelario Plus de la Unión Europea y el cierre de empresas, como la atunera Calvo, que arroja al desempleo a centenares de trabajadores.

El clima de incertidumbre que se acelera en el país preocupa a ciertos sectores de la burguesía, que en privado muestran su insatisfacción de cómo el gobierno conduce al país, aunque también desean que la población no salga a las calles a protestar por la inestabilidad o condiciones negativas que ello

representa para la estabilidad para las inversiones empresariales.

Ahora se reconoce que en el país existen dos fuerzas políticas y que la derecha neoliberal no debe empeñarse en buscar la desaparición del FMLN, para supuestamente allanar el camino para sus únicas decisiones respecto al rumbo del país, aunque la gente perciba la necesidad de cambio o al menos modificación de camino hasta ahora impuesto por los sucesivos gobiernos neoliberales.

Julio 7, 2006